



ACTOR: [REDACTED].

DEMANDADOS: SECRETARÍA DEL TRANSPORTE.

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL
AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA.

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN,
JALISCO.

SECRETARÍA DE LA HACIENDA
PÚBLICA.

MAGISTRADO: JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL.

SECRETARIO: JOSÉ GUILLERMO VIZCARRA
CASILLAS.

Guadalajara, Jalisco, 17 diecisiete de enero de 2020 dos mil veinte.

V I S T O S para resolver en **Sentencia Definitiva** los autos del Juicio Administrativo cuyo número de expediente se indica al rubro, promovido por **CARLOS TORRES DE LEÓN**, en contra de la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO**, así como de la **SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA**, y;

R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito presentado el 8 ocho de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, a través de la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, suscrito por [REDACTED], quien por su propio derecho, interpuso Juicio en Materia Administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se desprendieron.

2. Por auto de 20 veinte de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, se admitió la demanda, teniéndose como autoridades demandadas a la Secretaría del Transporte, Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, así como de la Secretaría de la Hacienda Pública; y como actos administrativos impugnados las cédulas de notificación de infracción folios **115287087, 19048398, 173445920, 173498330, 173723725, 175770224, 258115198 y 258577388**, la cédula de notificación de infracción folio **20120659359**, las cédulas de notificación de infracción folio **05112082008016 y 05913082008038**, el cobro del refrendo anual por placas vehiculares correspondiente a los años **2010** dos mil diez y **2011** dos mil once y **2012** dos mil doce y **2013** dos mil trece y **2014** dos mil catorce y **2015** dos mil quince y **2016** dos mil dieciséis y **2017** dos mil diecisiete y **2018** dos mil dieciocho y **2019** dos mil diecinueve.

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas las documentales señaladas, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y de los documentos anexos a la misma se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación produjera contestación a la demanda, ofrecieran y exhibieran pruebas con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así se les tendrían como ciertos los hechos que no fueran contestados salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados.

En la misma actuación, para la debida integración de las pruebas documentales precisadas, se requirió a las autoridades demandadas, para que al momento de producir contestación a la demanda remitieran las copias certificadas de los actos combatidos, toda vez que la parte actora en su escrito inicial de demanda, manifestó desconocer su contenido y acreditó haberlas solicitado con anterioridad a la demanda, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le aplicaría alguna de las medidas de apremio de las previstas en el artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; sin perjuicio de tenerles por ciertos los hechos que el actor pretendía acreditar con dichos documentos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 293 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.

Finalmente, se habilitaron días y horas inhábiles, a efecto de que se practicaran las notificaciones que derivaran de la tramitación del presente juicio, por ser necesario para su debida substanciación.



3. Con fecha 10 diez de enero de 2020 dos mil veinte, se tuvo a la Directora de lo Jurídico Síndico Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública y al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, produciendo contestación a la demanda, por opuestas las excepciones y defensas que de su escrito se desprendieron, se admitieron las pruebas ofrecidas por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, teniéndose por desahogadas, respecto a todas las autoridades señaladas, únicamente la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples de los escritos de contestación de demanda y documentos anexos al mismo se ordenó correr traslado a la actora para que quedara debidamente enterada de sus contenidos.

En ese sentido, se dio cuenta que las citadas autoridades demandadas fueron omisas en cumplir con el requerimiento, toda vez que no remitieron las copias certificadas de los actos administrativos impugnados, por lo que se les hizo efectivo el apercibimiento ahí contenido, teniéndoles por ciertos los hechos que el actor pretendía acreditar con esas documentales, de conformidad al artículo 293 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia.

Por lo anterior y en razón de que las pruebas admitidas, se habían desahogado en su totalidad, y que lo controvertido involucra cuestiones puramente de derecho, se otorgó a las partes un término común de tres días a fin de que formularan alegatos, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo así, se les tendría por perdido el derecho en ese sentido y se turnarían los autos para que se dictara la sentencia definitiva que en derecho correspondiera.

Sin que al efecto las partes hubieran comparecido a expresar alegatos dentro del término que para tal efecto les fue concedido, en el último párrafo del acuerdo establecido en el punto que antecede, en consecuencia se les hacen efectivos los apercibimientos contenidos en el párrafo que antecede y se les **declara** por perdido el derecho a rendir alegatos, ordenándose turnar los autos para que se dictara la Sentencia Definitiva que en derecho correspondiera, la cual hoy se pronuncia de conformidad a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia con base en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco,

3, 4, 5 y 10, y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

II. La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentra debidamente acreditada en actuaciones con las documentales que obran agregadas a fojas 13, 14 y 15, a las que se les otorga valor probatorio pleno en los términos de los artículos 48¹, 57² y 58³ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los diversos numerales 399⁴ y 400⁵ del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjetiva de la Materia.

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciera valer la accionante en su escrito inicial de demanda, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; se sustenta lo anterior por analogía y para mayor claridad se transcribe la siguiente Jurisprudencia:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de

¹ Artículo 48. En los juicios a que se refiere esta ley será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos, las contrarias a la moral y al derecho; y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento administrativo, salvo que en éste no se le hubiera dado oportunidad razonable de hacerlo.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de citación para sentencia. En este caso, la Sala ordenará dar vista a la contraparte para que en el término de cinco días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su admisión y valoración hasta la sentencia definitiva.

² Artículo 57. El ofrecimiento y desahogo de pruebas, salvo lo expresamente previsto en la presente ley, se regirá por las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

³ Artículo 58. La valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

⁴ Artículo 399.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.

⁵ Artículo 400.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba.



legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.” (Novena Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 2010. Tesis: 2a./J.58/2010. Página: 830.)

IV. Resultan procedentes los conceptos de impugnación expresados por la parte actora [REDACTED], contenidos en su escrito inicial de demanda, por lo que de conformidad a lo dispuesto por la fracción II de los artículos 74⁶ y 75⁷ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede **declarar** la **nulidad** de las cédulas de notificación de infracción folio **115287087, 19048398, 173445920, 173498330, 173723725, 175770224, 258115198 y 258577388**, de las cédulas de notificación de infracción folio **20120659359**, de las cédulas de notificación de infracción folio **05112082008016 y 05913082008038**; también, se **actualiza** la **prescripción** del pago del derecho de refrendo anual de placas vehiculares para los ejercicios fiscales **2010** dos mil diez, **2011** dos mil once, **2012** dos mil doce, **2013** dos mil trece y **2014** dos mil catorce; al igual que, se **declara** la **nulidad** del refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma para los ejercicios fiscales de los ejercicios fiscales **2015** dos mil quince, **2016** dos mil dieciséis, **2017** dos mil diecisiete, **2018** dos mil dieciocho y **2019** dos mil diecinueve, **para el efecto de que se aplique el cobro mínimo.**

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la normatividad invocada en el párrafo que antecede, se procede al examen de las causas de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones combatidas y más benéfica para la parte actora, atento al citado dispositivo legal así como a la tesis que aquí se inserta:

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA

⁶“Artículo 74. La sentencia definitiva podrá:

I. Reconocer la validez de la resolución o del acto impugnado;
Declarar la nulidad de la resolución o acto combatido;”

⁷ “Artículo 75. Serán causas de anulación de una resolución, de un acto o de un procedimiento administrativo:

I. ...
II. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada, o bien se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o se dejaron de aplicar las debidas

FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. *En el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos."(Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Abril 2007. Tesis: VIII.1o.86 A. Página: 1828.)*

En atención a los numerales y Jurisprudencia señalada, se procede al análisis de los conceptos de impugnación que vierte en su escrito inicial de demanda, mediante los cuales, substancialmente que respecto al pago de derechos por el servicio de refrendo anual de placas vehiculares para los ejercicios fiscales 2010 dos mil diez, 2011 dos mil once, 2012 dos mil doce, 2013 dos mil trece, 2014 dos mil catorce, se ha actualizado la figura jurídica de la prescripción, al haber pasado cinco años, sin que la autoridad fiscal haya emitido algún acto tendente a la ejecución de los mismos, en relación a los derechos de refrendo anual para los diversos ejercicios fiscales 2015 dos mil quince, 2016 dos mil dieciséis, 2017 dos mil diecisiete, 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, violentan el principio de proporcionalidad y equidad en materia tributaria, toda vez que se establecen cuotas distintas por servicios análogos, sin existir un equilibrio razonable entre la cuota establecida y el servicio prestado por el Estado, agrega que respecto a las cédulas de notificación de infracción impugnadas no le fueron debidamente notificadas, por lo que desconoce el contenido de las mismas, motivos por los que considera deberá declararse la nulidad de las resoluciones impugnadas.



Sin que a lo anterior, la Directora de lo Jurídico Contencioso del Municipio de Guadalajara, quien compareció en representación y sustitución de la autoridad demandada –Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco-, en su escrito de contestación de demanda recibido por este Tribunal el 9 nueve de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, haya realizado manifestación alguna, toda vez que de su escrito de contestación de demanda, no se advierte argumento alguno tendente a desvirtuar lo aseverado por el actor.

Al manifestarse a lo anterior, la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública, quien compareció en representación y sustitución la autoridad demandada -Secretaría de Hacienda Pública-, en su escrito de contestación de demanda recibido por este Tribunal el 11 once de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, (fojas 29 a 39), refiere que resulta infundado e inoperante los argumentos vertidos por el accionante, toda vez que, en primer término, señala que si bien es cierto que el numeral 23 y 24 de la ley de Ingresos del Estado de Jalisco respectivas, prevén cuotas distintas para el pago de derechos de refrendo de tarjeta de circulación y holograma, esto no transgrede los principios de equidad y proporcionalidad toda vez que al Estado le implica un despliegue técnico distinto para cada hipótesis prevista por el citado artículo, agrega que respecto a los requerimientos impugnados, estos no se han generaron al no haberse requerido al contribuyente de forma coactiva.

Sin que a lo anterior, el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, quien compareció en representación y sustitución de la autoridad demandada –Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan-, en su escrito de contestación de demanda recibido por este Tribunal el 11 once de diciembre de 2019 dos mil diecinueve, (fojas 40 a 46), refiere que es hasta cuando a la parte actora se le conceda el término para formular ampliación a su demanda es cuando puede especificar las razones por las cuales considera ilegal el acto impugnado.

En ese tenor, derivado de los argumentos establecidos en párrafos anteriores, se considera que le asiste la razón al accionante cuando refiere que las cédulas de notificación de infracción impugnadas, violentan las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no le fueron notificadas, no obstante que la autoridad emisora se encuentra obligada a ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 377 , así como por la fracción III, del artículo 378 del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en los cuales se establece que en caso de que el conductor no se encuentre en el lugar del vehículo, el agente vial procederá a elaborar la cédula de notificación correspondiente y la dejará en un lugar visible y seguro del vehículo, con independencia de los motivos que hayan generado el levantamiento de la misma, así como aquella que sean

detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en la cédula de notificación de infracción, así como que la misma deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores a su levantamiento, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado.

También se precisa en el dispositivo legal citado en último lugar, que en el caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo reciba o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello; es necesario precisar que la parte actora en su escrito inicial de demanda, manifestó desconocer el contenido del acto combatido, por lo que se requirió a las autoridades demandadas para que remitieran las copias certificadas, sin embargo en auto de fecha 10 diez de enero de 2020 dos mil veinte, hubieran comparecido a cumplimentar dicho requerimiento, por lo que se les tuvieron como ciertos los hechos que el actor pretendía acreditar; quedando de manifiesto que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, al no haber sido legal y debidamente notificada, toda vez que constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración pública, por lo que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de legalidad y seguridad jurídica resguardadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia **declarar la nulidad** de las cédulas de notificación de infracción folio **115287087, 19048398, 173445920, 173498330, 173723725, 175770224, 258115198 y 258577388**, las cédulas de notificación de infracción folio **20120659359**, las cédulas de notificación de infracción folio **05112082008016 y 05913082008038**.

“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa;



3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.”(Octava Época. Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 1992. Tesis: P.LV/92. Página: 34.)

Por otro lado, de los argumentos antes sintetizados, se estima sustancialmente **fundado** el concepto de nulidad en el que la parte actora refiere, de manera substancial que el cobro de derechos relativo al refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma para los ejercicios fiscal **2010** dos mil diez, **2011** dos mil once, **2012** dos mil doce, **2013** dos mil trece y **2014** dos mil catorce; han prescrito, pues ya transcurrió el término previsto en el artículo 90 del Código Fiscal del Estado de ésta Entidad Federativa.

En ese orden de ideas, es preciso señalar el contenido de los artículos 90, 91 y 94 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, establece lo siguiente:

“Artículo 90.- Las obligaciones ante la Hacienda del Estado y los créditos a favor de éste, por impuestos, derechos, productos o aprovechamientos, se extinguen por **prescripción en el término de cinco años**. En el mismo plazo se extingue también por prescripción, la obligación del fisco del Estado de devolver las cantidades pagadas indebidamente.

La prescripción del crédito principal extingue simultáneamente los recargos, sanciones y gastos de ejecución.

La prescripción se inicia a partir de la fecha en que el crédito o el cumplimiento de la obligación pudieron ser legalmente exigidos y será reconocida o declarada por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a petición de cualquier interesado”.

“Artículo 91. La prescripción **se interrumpe con cada gestión de cobro notificada** en los términos del artículo 94 de este Código, por el reconocimiento expreso o tácito del deudor, respecto de la existencia de la obligación de

que se trate. De los requisitos señalados en este artículo deberá existir constancia por escrito”.

“Artículo 94. *Las notificaciones de los citatorios, emplazamientos, solicitudes de informes o documentos y las de acuerdos o resoluciones administrativas que puedan ser recurridas, se harán personalmente.*

Se notificará por edictos, cuando se ignore el domicilio de la persona a quien se deba notificar, o ésta se encuentre fuera del Estado, sin haber dejado representante legal acreditado ante las autoridades fiscales locales.

Se notificará por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no se encuentre después de iniciadas las facultades de comprobación o se oponga a la diligencia de notificación y en los demás casos que señalan las leyes fiscales y este Código.

De los preceptos legales transcritos, se advierte, sustancialmente, que las contribuciones a favor del fisco, derivadas por, en lo que interesa créditos por impuestos y derechos, se extinguen por prescripción, en el término de cinco años, misma que se inicia, a partir de la fecha en que pudieron ser legalmente exigidos; asimismo, que ésta se interrumpe con cada gestión de cobro notificada.

Ahora, en el particular, la parte actora sostiene que el derecho de refrendo anual de placas vehiculares para los ejercicios fiscales 2010 dos mil diez, 2011 dos mil once, 2012 dos mil doce, 2013 dos mil trece y 2014 dos mil catorce, prescribieron por el transcurso del tiempo, sin que la autoridad haya notificado algún procedimiento de ejecución que interrumpa dicho término.

Se estima le asiste la razón a la parte actora respecto a la **prescripción** aducida en relación al refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma para los ejercicios fiscales **2010 dos mil diez, 2011 dos mil once, 2012 dos mil doce, 2013 dos mil trece y 2014 dos mil catorce**, toda vez que la autoridad demanda no acredita haber notificado de manera personal al actor requerimiento de cobro alguno con el cual se interrumpa el término para que opere la prescripción solicitada por el demandante.

Por otra parte, respecto al diverso concepto de impugnación hecho valer por la parte actora, en su escrito inicial de demanda, mediante el cual, medularmente señala que el refrendo anual de placas vehiculares para los ejercicios fiscales 2015 dos mil quince, 2016 dos mil dieciséis, 2017 dos mil diecisiete, 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, en su artículo 24, fracción III y 23, fracción III, de las Leyes de Ingresos respectivas,



establecen 3 tarifas distintas, atendiendo al tipo de vehículo, sin tomar en cuenta el costo de la actividad desarrollada por el Estado, por lo que considera que se violenta en su perjuicio de proporcionalidad en materia tributaria consagrada en el artículo 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

El concepto de impugnación se estima **fundado**, para llegar a esta conclusión es necesario precisar que, como contribuciones, los derechos se encuentran sujetos a los principios constitucionales en materia fiscal, inmersos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“Artículo 31. *Son obligaciones de los mexicanos: ...*

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

En materia de los derechos por servicios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, en vista del respeto a los principios constitucionales en materia fiscal de equidad y proporcionalidad tributaria, para fijar el monto de tales derechos, debe atenderse al objeto real del servicio prestado por el ente público y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos.

Se invoca la jurisprudencia siguiente:

“DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. *Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la*

legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos".(Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Jurisprudencia 196934, Página: 41.)

Es preciso puntualizar que la proporcionalidad en las contribuciones establecidas por un servicio prestado por el gobierno en su carácter de persona de derecho público, en la actualidad se entiende no como el costo exacto o aproximado, a una contraprestación otorgada por el pago de una cuota y en función de la capacidad económica de los causantes del servicio solicitado, sino en función de la interdependencia razonable entre el monto del pago de una cuota y el servicio prestado por el gobierno en uso de una función administrativa.

Ahora, en lo que aquí interesa, el artículo 24, fracción III y 23, fracción III, de las Leyes de Ingresos del Estado de Jalisco, para los ejercicios fiscales 2015 dos mil quince, 2016 dos mil dieciséis, 2017 dos mil diecisiete, 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, establecen lo siguiente:

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015 DOS MIL QUINCE.

Artículo 24.- Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

...

III. Por refrendo anual de registro y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas, incluyendo eléctricos:

a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques: \$476.00



- b) *Motocicletas* \$110.00
- c) *Placas de Demostración:* \$1,153.00
- ...

"LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS.

Artículo 24.- Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

...

III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas, incluyendo eléctricos:

- a) *Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques:* \$492.00
- b) *Motocicletas:* \$114.00
- c) *Placas de Demostración:* \$1,193.00
- ...

"LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 DOS MIL DIECISIETE.

Artículo 24.- Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

...

III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas, incluyendo eléctricos:

- a) *Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, incluyendo los vehículos eléctricos y remolques:* \$507.00

b) Motocicletas:	\$117.00
c) Placas de Demostración:	\$1,229.00
...”	

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

Artículo 23.- Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas:

a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques:	\$522.00
b) Motocicletas:	\$120.00
c) Placas de Demostración:	\$1,266.00

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

Artículo 23.- Por los servicios que preste la Secretaría de Movilidad y, en su caso, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, se causarán derechos de acuerdo con la tarifa correspondiente:

III. Por refrendo anual y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, para el servicio particular y público, así como motocicletas:

a) Automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores, y remolques:	\$590.00
b) Motocicletas:	\$168.00
c) Placas de Demostración:	\$1,431.00

De lo anterior, queda de manifiesto que el artículo 24 fracción III de la Ley de Ingresos para los ejercicios fiscales 2015 dos mil quince, 2016 dos mil dieciséis y 2017 dos mil diecisiete y el artículo 23, fracción III de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018



dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, violentan los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31 fracción IV⁸ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que por el servicio de refrendo anual de registro y holograma para automóviles, camiones, camionetas, tractores automotores y remolques, servicio particular y público, así como motocicletas y autos eléctricos, se establecen **tres tarifas diferentes atendiendo al tipo de vehículo**, situación que no atiende al costo de la actividad que el Estado desarrolla para prestar el servicio público, de refrendo anual de registro y holograma, aunado a que tampoco se advierte motivación jurídica alguna que justifique la diversidad contributiva en el pago de los citados derechos; sin que ello signifique que se encuentre relevado de su obligación constitucional contenida en el artículo 31 fracción IV⁹ de nuestra Carta Magna, en el sentido de que es necesario que todos los gobernados contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva y tratándose de la contraprestación que debe cubrir un ciudadano por un servicio que le preste el Estado, se traduce que todos los individuos que se sitúen en una misma hipótesis normativa paguen la misma tarifa por el servicio prestado, en el caso concreto por la obtención de la tarjeta de circulación así como el refrendo de la información relativa en el padrón vehicular, no debe atender a factores ajenos a la actividad técnica que debe desplegar el Estado, como lo es el tipo de vehículo.

Por lo que, para **determinar** las cantidades que debe cubrir el contribuyente, por concepto de refrendo anual y holograma, la autoridad demandada -Secretaría de la Hacienda Pública-, atendiendo a los lineamientos expuestos en el presente considerando se deberán determinar los montos a cubrir por concepto de derechos por refrendo anual y holograma, atendiendo a la **tarifa mínima** establecida en el numeral 24, fracción III de la Ley de Ingresos del Estado Jalisco, para los ejercicios fiscales 2015 dos mil quince 2016 dos mil dieciséis y 2017 dos mil diecisiete y el artículo 23, fracción III de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, es decir, **\$110.00** (ciento diez pesos 00/100 moneda nacional), **\$114.00** (ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional), **\$117.00** (ciento diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), **\$120.00** (ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional) y **\$168.00** (cientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente Jurisprudencia cuyo rubro y texto señalan:

**“DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE
LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL**

⁸ *Ibid.*

⁹ *Idem.*

MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. *Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." (Decima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Tomo 2, Mayo de 2012, Jurisprudencia, Página: 1244.)*



En consecuencia, resulta procedente el cobro del mínimo del pago de derechos por concepto de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma, respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED], **para el efecto** de que la autoridad demandada determine las cantidades a pagar por el concepto de derecho anual de tarjeta de circulación y holograma, atendiendo a la **tarifa mínima** establecida en el artículo 24, fracción III, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales 2015 dos mil quince, 2016 dos mil dieciséis y 2017 dos mil diecisiete y el artículo 23, fracción III de la Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2018 dos mil dieciocho y 2019 dos mil diecinueve, es decir, **\$110.00** (ciento diez pesos 00/100 moneda nacional), **\$114.00** (ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional), **\$117.00** (ciento diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), **\$120.00** (ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional) y **\$168.00** (cientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).

Resulta aplicable por analogía la siguiente tesis emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación.

DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO DE LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO. *El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, considera que los preceptos legales indicados violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto prevén el monto de derechos por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma. En congruencia con ese criterio, y con el fin de imprimirle mayor seguridad jurídica, atento a lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar las consecuencias jurídicas que conlleva la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas generales citadas, cuando se impugnan en amparo directo, con motivo de su aplicación en una sentencia definitiva que declaró la validez legal de los créditos fundados en tales*

preceptos, a saber: I. El tribunal responsable deberá dejar insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, emitir una nueva en la que decrete la nulidad de los créditos fiscales por los conceptos indicados, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2011 a 2015, respecto del vehículo propiedad del quejoso; y, II. Los efectos de dicha nulidad deberán de atender al vicio de inconstitucionalidad detectado, ordenando a la autoridad administrativa demandada que emita una nueva resolución en la que inaplique la porción normativa que resultó contraria al texto constitucional, empero, vinculándola a cuantificar los derechos por esos servicios en función de la tarifa más baja. En adición a ello, es menester precisar de manera enunciativa, que el otorgamiento del amparo en esos términos, no podría tener el alcance de impedir la aplicación presente o futura de las disposiciones mencionadas en perjuicio del quejoso, ni servir de sustento para anular u obtener la devolución de sumas pagadas como consecuencia de actos diferentes, sean previos o posteriores a los créditos indicados. (Época: Décima Época. Registro: 2016854. Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Mayo de 2018. Tesis: PC.III.A. J/42 A (10a.)

Bajo las argumentaciones vertidas, se considera innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de anulación y pruebas aportadas al sumario que hacen valer las partes, porque su estudio sería innecesario al no influir en la variación del sentido de esta resolución, en términos del criterio Jurisprudencial que dice:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos de violación tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de los restantes, pues su examen en nada variarían el sentido de la resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna para que dicha consideración



sustente por sí sola el sentido del fallo.” (Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV. Mayo de 2007. Tesis: IV.2º.C.J/9. Página: 1743).

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 72, 73, 74, 75, 76, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente controversia, de conformidad con los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. La parte actora [REDACTED], en el presente juicio, **desvirtuó** la legalidad de los diversos actos administrativos impugnados.

SEGUNDO. Se **declara la nulidad** de las cédulas de notificación de infracción folio **115287087, 19048398, 173445920, 173498330, 173723725, 175770224, 258115198 y 258577388**, las cédulas de notificación de infracción folio **20120659359**, las cédulas de notificación de infracción folio **05112082008016 y 05913082008038**; impuestas al vehículo con placas de circulación [REDACTED]; por los motivos y razonamientos analizados en el último considerando de la presente resolución.

TERCERO. Se **actualiza la prescripción** del derecho de refrendo anual de placas vehiculares para los ejercicios fiscales **2010 dos mil diez, 2011 dos mil once, 2012 dos mil doce, 2013 dos mil trece y 2014 dos mil catorce**, impuestas al vehículo con placas de circulación [REDACTED]; por los motivos y razonamientos analizados en el último considerando de la presente resolución.

CUARTO. Se **declara la nulidad** del derechos de refrendo anual de tarjeta de circulación y holograma de los ejercicios fiscales de los ejercicios fiscales **2015** dos mil quince, **2016** dos mil dieciséis, **2017** dos mil diecisiete, **2018** dos mil dieciocho y **2019** dos mil diecinueve; para **el efecto de que se aplique la tarifa mínima**, es decir **\$110.00** (ciento diez pesos 00/100 moneda nacional), **\$114.00** (ciento catorce pesos 00/100 moneda nacional), **\$117.00** (ciento diecisiete pesos 00/100 moneda nacional), **\$120.00** (ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional) y **\$168.00** (ciento sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), impuestas al vehículo con placas de circulación [REDACTED]; por los motivos y razonamientos analizados en el último considerando de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvió el Magistrado JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, Presidente de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco actuando ante la presencia del Secretario de Sala JOSÉ GUILLERMO VIZCARRA CASILLAS, quien autoriza y da fe.

EL MAGISTRADO PRESIDENTE

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL

EL SECRETARIO DE LA SALA

JOSÉ GUILLERMO VIZCARRA CASILLAS

JLGM/JGVC/efh.

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y reservada que deberán observar los Sujetos Obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”